

Orden de resolución del contrato “servicio de información sobre las condiciones previas para el ejercicio de la profesión de transportista, obtención de autorizaciones de transporte y demás trámites necesarios para la gestión del transporte” A/SER-001358/2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por orden de 13 de agosto de 2019 se adjudicó el contrato a la empresa LAKI SOCIAL, S.L.- B87300034, actualmente denominada MAGÉNTICA SOCIAL SL, en el precio de 168.847,76 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses.

El contrato se formalizó con fecha 9 de octubre de 2019, previa constitución de la garantía definitiva en efectivo por importe de 6.977,18 euros, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, según acredita con resguardo número 201955003642L, de fecha 18 de julio de 2019.

Se inició su ejecución el 10 de octubre de 2019 debiendo finalizar el 9 de octubre de 2021.

SEGUNDO. - Mediante orden de fecha 25 de marzo de 2020 se suspendió totalmente la ejecución del contrato con efectos en fecha 14 de marzo de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Con fecha 4 de junio de 2020 se dictó orden de levantamiento de la suspensión del contrato, reiniciándose la ejecución del contrato el 8 de junio de 2020; debiendo finalizar el contrato el 3 de enero de 2022.

TERCERO. - Mediante orden 15 de diciembre de 2021 se aprobó la prórroga del contrato por 24 meses hasta el 3 de enero de 2024. La prórroga supuso un incremento del precio del contrato de 167.807,16 euros.

CUARTO. - En fecha 18 de abril de 2023 la Subdirección General de Transportes y Movilidad Carreteras efectuó propuesta de resolución del contrato en base a lo dispuesto en el artículo 211.1 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

QUINTO. - En fecha 3 de mayo de 2023 se dictó orden de inicio del expediente de resolución.

SEXTO. - Mediante comunicación de fecha 5 de mayo de 2023 se dio trámite de audiencia al contratista, con acuse de recibo del mismo día. Trascurrido el plazo concedido, no se ha formulado alegación alguna ni presentado ninguna documentación.

SÉPTIMO. - En fecha 31 de mayo de 2023 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha emitido informe favorable.

OCTAVO.- En fecha 20 de junio 2023, el expediente ha sido informado favorablemente por la Intervención Delegada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Régimen jurídico del contrato.

PRIMERO.- La cláusula segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato dispone que “El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.”

B) Régimen Jurídico de la extinción de los contratos

SEGUNDO.- El artículo 209 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en (LCSP), dispone que los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución.

C) Régimen Jurídico de la causa de resolución por incumplimiento de la obligación del contrato.

TERCERO.- El artículo 211.1 f) de la LCSP establece como causa de resolución del contrato el incumplimiento de la obligación principal del contrato.

La propuesta de la Subdirección General de Transportes y Movilidad señala lo siguiente:

Desde fecha 3 de abril de 2023 la empresa Magentica Social S.L. no está prestando el contrato del que resultó adjudicataria, y no cumple desde esa fecha, con las obligaciones dimanantes del contrato recogidas en la cláusula primera “Especificaciones técnicas” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

CUARTO.- El artículo 213.3 de la LCSP indica que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

QUINTO.- El artículo 213.5 de la LCSP dispone que en todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

D) Sobre el procedimiento.

SEXTO.- En materia de procedimiento, el extinto Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el Dictamen 545/2015, distingue entre la normativa aplicable al procedimiento y la norma sustantiva aplicable al contrato y establece que la normativa procedimental a aplicar es la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de resolución del contrato, siendo por tanto aplicable la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (LCSP) y el RGLCAP.

SÉPTIMO.- El artículo 190 de la LCSP establece que “dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.

OCTAVO.- El artículo 191 de la LCSP regula el procedimiento de ejercicio de las prerrogativas de la Administración:

1. “En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones

Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

NOVENO.- Por su parte, el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) desarrolla el procedimiento para la resolución de los contratos estableciendo:

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
 - a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
 - b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador, si se propone la incautación de la garantía.
 - c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.
 - d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.

DÉCIMO.- De acuerdo con el Informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 576/2021, de 10 de noviembre los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos, en el plazo de 3 meses, plazo establecido con carácter general en el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 39/2015.

DÉCIMO PRIMERO.- El artículo 5.2 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid establece que “Cuando el Gobierno autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de resolución y la resolución misma, en su caso.”

E) Sobre la competencia para resolver.

La competencia en materia de contratación le viene atribuida a esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 38/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

El órgano de contratación de la Consejería es el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Mediante orden de 9 de septiembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en fecha 16 de septiembre de 2021, el órgano de contratación delegó el ejercicio de la competencia de resolución para este contrato en el Director General de Transportes y Movilidad.

A la vista de lo expuesto, previo informe favorable de Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de la Intervención ORDENO:

Resolver el contrato “servicio de información sobre las condiciones previas para el ejercicio de la profesión de transportista, obtención de autorizaciones de transporte y demás trámites necesarios para la gestión del transporte” suscrito con la empresa MAGÉNTICA SOCIAL SL NIF B87300034 por incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Procederá incautar la garantía definitiva por importe de 6.977,18 euros, depositada en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, con resguardo número 201955003642L, de fecha 18 de julio de 2019

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 09.09.2021, BOCM 16.09.2021)
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Firmado digitalmente por: TORRES HERNÁNDEZ LUIS MIGUEL
Fecha: 2023.07.31 09:38